

efecto; el parecer fiscal; el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino. Por sus propios legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el Juez primer Suplente de Distrito en 27 de Enero del presente año; que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á las señoras religiosas exclaustradas D^{as} Concepcion Izquierdo y demas que han promovido este recurso, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones, que les embargó una libranza por valor de cuatrocientos pesos, y remató una paja de agua de la casa núm. 5 de la calle de Cinco Señores en Querétaro; para hacer efectivas las contribuciones por los capitales que tienen encondados como dotes en las Haciendas del Batán y San Francisco y casa de Cinco Señores.

Devuélvanse estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Voto:

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Anza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, veinticinco de Julio de mil ochocientos setenta y cinco.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por Manuel Cipriano Narvaez, contra el C. Juez 2º de lo criminal del departamento de esa ciudad, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Promotor dice: que el presente juicio se ha seguido á instancia de los CC. Manuel y Cipriano Narvaez, que interpusieron recurso de amparo reclamando el acto del C. Juez 2º de 1ª instancia del ramo criminal de esta ciudad, que por un delito que se les atribuye de faltas cometidas al Regidor de ronda, el cual cual no merece pena corporal, se les consignó á la cárcel; juzgándolos dos veces por un mismo delito, pues tenían ya satisfecha una multa de 17 pesos, que se les impuso por dicha falta, y con en76 procedimiento juzgan violadas en su persona las garantías que la Constitución General de la República les otorga en sus arts. 24, 18 y 16.

En el informe que el Juez responsable rindió, ha procurado cincerarse negando haber extendido el recibo de la multa de 17 pesos que cobró á los quejosos, cuando estos por su parte, en el término probatorio, han evidenciado que hubo tal recibo, que con capociudad se le recogió para desaparecerlo, y que se les devolvió ó trató de devolvérselos dicha cantidad cuando estaba ya acusado el Regidor Molina y el mismo Juez, que la impuso, motivos por que, aquellos afirman estar violado el art. 24, por habérseles sujetado á un juicio para conocer del mismo delito que habia ya terminado, mediante la multa que se les impuso con este objeto.

Este artículo dice en su segunda parte: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva ó se le condene." Para que pudiera decirse que los promoventes Narvaez,

han sido juzgados dos veces por un mismo delito, á juicio del Fiscal sería preciso que las faltas por las que se los sujetó á juicio posteriormente, se hubieran determinado y penado en definitiva por el Juez, previa la discusión legítima del negocio, y en la forma de juicio que, por la ley, le correspondía, y no como lo hizo, castigando de plano y sin figura de juicio alguno á los presuntos reos, sin dejar constancia alguna de lo actuado para sujetar á la revisión del Superior Tribunal de Justicia, como está mandado por las leyes del Estado, aún para los delitos leves que se terminen en juicio verbal. Pero repite el que suscribe, que esto lo juzga un proceder inusitado, un abuso punible del Juez de 1ª Instancia, y que el de Distrito deberá compulsar todo lo conducente para remitirlo á dicha superioridad, para que corrija tamaños atentados, y no aún ataque el artículo constitucional citado.

Respecto del 18 que también la parte creo violado, sin considerarse el 16 que igualmente evoca en su favor, porque el Fiscal no lo cree vulnerado no habiendo el Juez faltado á ninguna de sus prescripciones, si observa que se ha violado, encarcelando á los quejosos y reduciéndolos á formal prisión por un delito que, probado, solo merecería arresto ó multa, según el art. 911 del Código penal vigente. Y no solo, sino que el Juez responsable los sujetó á un juicio escrito, contra el tenor literal y expreso de la ley de 13 de Diciembre de 1872, que adoptó para el Estado dicho Código, y que en su artículo diez testualmente así: "Mientras no se promulgue el Código de procedimientos criminales, los Jueces de 1ª Instancia de Estado instruirán y determinarán en juicio verbal todos los procesos que se formen por delitos, cuya pena no pase de arresto mayor, 500 pesos de multa ó reclusión penal por un año. En todo lo demás relativo al procedimiento, se sujetarán á las leyes de administración de justicia de 5 de Enero de 1857 y 15 del mismo

más de 1869, y en las demás preexistentes, en lo que no se oponga el Código penal." Por tales fundamentos, y siendo inconcuso, en sentir del Fiscal, que se ha violado en tal persona de los ocurentes Narvaez, el art. 18 de la Constitución general de la República, concluye pidiendo, que el Juzgado de su merecido cargo, decreta: que la Justicia de la Unión los ampara y proteja contra los procedimientos del C. Juez 2º de 1ª Instancia del ramo criminal de esta ciudad, que los ha vejado en los términos al principio referidos.

San Cristóbal de las Casas, Noviembre 25 de 1874.—*Carlos Banillas.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado Libre y Soberano de Chiapas: San Cristóbal Las Casas, Noviembre 30 de 1874:

Visto este juicio de amparo promovido por los ciudadanos Manuel y Cipriano Narvaez, contra los procedimientos del Juez 2º del ramo de lo criminal del departamento de esta ciudad, que los mandó detener y en seguida reducir á formal prisión en las cárceles de la misma ciudad, teniendo á los procesados en calidad de reos del delito de injurias y ultrajes hechos al regidor ciudadano Vicente Molina, con cuyos procedimientos estiman violadas las garantías que otorga el artículo 24 de la Constitución de 5 de Febrero de 1857, por juzgarlos acerca de aquel hecho de que ya los tenía juzgados; la que otorga el artículo diez y ocho, por tenerlos presos, con ocasión del mismo delito, sin que merezca pena corporal, y últimamente la que otorga el artículo diez y seis, por estimar el procedimiento sin causa legal que lo funde y motive: visto el informe pedido para resolver previamente sobre la suspensión de los procedimientos reclamados, y emitido por el citado Juez segundo de lo criminal: el auto respectivo de suspensión de los citados procedimientos; el infor-

me justificado de la misma autoridad; las pruebas rendidas por los promoventes; los alegatos de las partes y cuanto mas verse debia.

Considerando: que los promoventes Manuel y Cipriano Narvaez, presentaron con su escrito de fecha veinte y cuatro de Octubre último, en copia certificada por el escribano C. Manuel Górriz, un recibo en cantidad de diez y siete pesos, otorgado por el relacionado Juez segundo, ciudadano Rafael María Roman, por multa impuesta á aquellos, por el delito de injurias hechas al ciudadano regidor Vicente Molina, cuyo recibo fué tambien presentado en tiempo, como una de tantas pruebas de los promoventes, habiendo manifestado: que no hacian exhibicion del recibo original, por cuanto el relacionado Juez segundo de lo criminal se los habia exigido á pretesto de tener que trasladarlo al papel del sello correspondiente, sin que se los hubiere devuelto.

Considerando: que la misma autoridad informante confiesa la detencion hecha por el Regidor Molina á los relacionados Narvaez, la noche del 25 de Octubre, y la libertad que les otorgó el 26 del mismo mes, lo cual induce á creer que en efecto los juzgó de plano y sin figura de juicio, sin que sea de la incumbencia de este Juzgado, averiguar si en esto obró bien ó mal el citado Juez de 1ª instancia.

Considerando: que aunque la autoridad informante (fojas 24 vta.) sostiene que seguramente por haberse evaporado su procedimiento, los quejosos ocurrieron á él pretendiendo un arreglo en la tarde del 28 de Octubre, y que habiéndose opuesto á aceptar la multa que le ofrecian, sacaron una porcion de dinero de la bolsa y lo pusieron en la mesa del Juzgado, y sin que le fuera posible reducirlos á que lo percibieran de nuevo; esta especie en cuanto á la concurrencia voluntaria de los quejosos, está contradicha por la misma autoridad que espresa (fojas 8 vta.) que, por llamado que les hizo en aquella fecha, concurrieron á su despa-

cho los quejosos con el Regidor Molina, y además, está desvanecida por su propia declaracion de fojas 62 á 63, en la cual reconoció la boleta citatoria que dirigió al C. Manuel Narvaez, así como con el suficiente número de testigos está comprobado el llamado que hizo al C. Cipriano Narvaez en la tarde del mismo dia 28.

Considerando: que aunque la autoridad informante niega en su informe y en su declaracion de fojas 62, haber estendido el expresado recibo, impuesto ninguna multa y percibido cantidad alguna de los quejosos, la verdad de los hechos está probada con el recibo adjunto á fojas 1ª y con el testimonio (fojas 59 fte.) del escribano C. Manuel Górriz, que declara que al parecer, la firma del C. Rafael María Roman, que cubria el recibo, cuya copia compulsó, es la misma que usa en todos sus actos, y que el recibo no tenia señal alguna de falsificacion; con el de los testigos Manuel García (fojas 52 y 53,) que sostiene que estando en el despacho del citado Juzgado segundo, en 26 de Octubre último, oyó que el Juez Roman, tratando del suceso ocurrido entre los Narvaez y el Regidor Molina, dijo: que todo se arreglaría con una multa; con el de Pomposa Montoya (fojas 53 vta.) que afirma que en la misma fecha y en el despacho del propio Juzgado, oyó un altercado entre los Narvaez y Molina, entrando á un cuarto, y que al salir dijeron entre sí: que quedaban arreglados, y que el Juez dijo á los Narvaez que le llevaran la multa; con el de Juana Mª Sanchez, (fojas 54,) que espresa lo mismo, respecto al altercado, y que oyó que el Juez propuso á los Narvaez el pago de una multa para no volver á la carcel, y que aunque no convenian en el pago, se comprometieron por indicacion del C. Lic. José Joaquín Peña; con el de Juana López que afirma lo mismo en cuanto al altercado y proposicion de la multa, que resistian los Narvaez, y que aceptaron por indicaciones del C. José Rosales, cuyo testimonio corrobora el anterior; con el del C. Manuel Pe-

nagos (fojas 55), que sostiene haber visto entregar al Juez Román, 17 pesos y extender él un recibo, que despues, y estando en poder del C. Manuel Narvaez, leyó y vió que la firma que le cubria era. á no dudar, la del Juez Román; pues ha tenido ocasion de conocerla como jefe de cuartel, especie que se haya robustecida con el testimonio (fojas 57), del C. Román Aguilar, que sostiene haber visto el recibo y firma del citado Juez Román, la cual concor, con el de Pedro Quitos (fojas 35), que asegura haber visto que el 29 de Octubre último el C. Manuel Narvaez entregó 17 pesos al C. Juez Román, quien otorgó recibo á aquel, diciendole: "aquí tiene vd. el recibo de la multa," y últimamente con el de Atanacia de la Cruz, (fojas 35 y 36), que igualmente sostiene haber visto al citado Narvaez, entregar 17 pesos al Juez, y éste escribir y dar á aquel un papel, todo lo cual prueba que en efecto fueron juzgados y sentenciados los relacionados Narvaez.

Considerando: que aunque la autoridad informante sostiene no ser cierto, como los CC. Narvaez pretenden, que los hubiesen juzgado y sentenciado de plano, sino que aparecieron libres y fuera de la detencion en que los habia puesto la noche del 25 de Octubre, el C. Regidor Molina, por haberlos dejado á derecho, con motivo de que el recargo de su juzgado (fojas 24) no le permitia ocuparse desde luego de aquel negocio, esta especie se desvanece con el hecho de no estar notificado, como consta á fojas 47, el auto cabeza de proceso proveido el 26 de Octubre, en el cual tambien se manda á los presuntos reos estar á derecho y conaparecer recibidas en la misma fecha, las declaraciones de los CC. Vicente Molina, Victor Mandujano, Octaviano Caseros y Apolinario Perez, no obstante que se hacen sospechosas de falsedad las citadas diligencias, atenta la contradiccion que hay entre ellas por la fecha en que aparecen practicadas y lo que el Juez dice en su informe, sobre no tener tiempo de ocuparse

TOMO VII—PARTE II.

de aquel asunto, y el testigo Perez supuesto el mérito del testimonio (fojas 49) del testigo Mandujano, que sostiene no haber declarado el dia 26 citado ante el Juzgado 29 de 1ª instancia, sin embargo de que en las diligencias seguidas por aquel, es posterior la declaracion de Perez á la de Mandujano, segun consta á fojas 13 vta. y 14 fte. de estos autos.

Considerando: que á ser cierto como sostiene la autoridad informante, que el recargo de negocios que tenia el dia 26 de Octubre no le permitia ocuparse del de los quejosos, no aparecieron practicadas con la misma fecha las diligencias que acompaña á su informe, constantes del auto cabeza de proceso y declaraciones de los CC. Vicente Molina, Octaviano Caseros, Victor Mandujano, y Apolinario Perez, todo lo cual unido al parte del citado Regidor, era bastante para ministrarle la luz suficiente sobre si habia de detener y aun reducir ó no a prision á los repetidos Narvaez, sin tener necesidad de dejarlos á derecho, como pretende sostenerlo.

Considerando: que una vez juzgados los presuntos reos Narvaez, no podian volver á juzgarse por el mismo hecho, conforme al citado art. 24 de la Constitución federal, sin violar la garantía que el otorga.

Considerando asimismo: que ya juzgados, no existe causa legal que funde y motive el nuevo procedimiento por el cual se ordenó la detencion de los quejosos, violando la garantía que otorga el art. 16 de la citada Constitución.

Considerando: que el mismo Juez informante expresa, que los repetidos Narvaez no podian merecer sino una pena pecuniaria ó de arresto menor, ó cuando más una y otra, en cuyo caso no procedia el auto de formal prision, por no haber lugar á aplicar pena corporal, y que ya juzgados, ménos podia decretarse la prision, sin violar el art. 18 de la Constitución, por no haber lugar á imponer pena de ningún género, aun cuando al juzgarse por primera vez á los pre-

suntos reos, hubiese procedido mal al Juez de la causa, lo cual no incumbe á este Juzgado averiguar, por ser del resorte de los Tribunales comunes.

Considerando finalmente, cuanto mas verse y considerarse debia; y con fundamento de los arts. 16, 18 y 24 ya citados de la Constitucion federal, del ciento uno de la misma y de los trece y veintisiete de las ley de 20 de Enero de 1869, este Juzgado venia en fallar y falla:

1º La justicia de la Union ampara y protege á los CC. Manuel y Cipriano Narvaez, contra los procedimientos del Juez 2º de lo criminal del Departamento de esta Ciudad, que juzgándolos segunda vez por el delito de injurias que se dice infringieron al C. Regidor Vicente Molina, viola las garantías de que tratan los arts. 16, 18 y 24 de la citada Constitucion federal.

2º Se compulsará copia en lo conducente, de estas diligencias en la parte que inducen sospechas de los delitos de falsedad contra el citado Juez 2º de lo criminal y el testigo Apolinario Perez, si fuere confirmado este fallo, y se consignará al Superior Tribunal de Justicia del Estado, para que determine lo conveniente.

3º Notifíquese á quienes corresponda y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia, sacándose copia del pedimento fiscal y de este fallo, para su publicacion por la prensa.

Así lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito en el Estado, ante el escribano del despacho que da fé. (Firmados.)—*Fernando Zepeda.*—*J. Crisóstomo Lara.*

Son copias que certifico, con los de asistencia que suscriben, por impedimento del escribano del despacho.

San Cristobal-Las Casas, Diciembre 4 de 1874.—*Fernando Zepeda.*—*M. A. Utrillo.*—*Eligio A. Cordero.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 18 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Chiapas, por los CC. Manuel y Cipriano Narvaez, exponiendo: que el C. Vicente Molina, Regidor del Ayuntamiento de la ciudad San Cristobal, les mandó detener en la cárcel pública á disposición del Juez 2º de lo criminal, acusándolos de haber cometido faltas de respecto á su autoridad, por las cuales se les impuso é hizo pagar una multa de 17 pesos, poniéndolos en seguida en libertad; que despues volvieron los promoventes á ser detenidos por orden del mismo juzgado 2º, y se les redujo á prision formal; no obstante, que habian sido ya castigados y que el delito de injurias de que se les acusó no merece pena corporal; con cuyos procedimientos en concepto de los quejosos, se han violado en su persona las garantías consignadas en los arts. 16, 18 y 24 de la Constitucion federal.

Visto el informe rendido por la autoridad cuyos actos se reclaman, y la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo, de conformidad con el pedimento fiscal; y

Considerando: que de las constancias de autos aparece justificada la procedencia legal del presente recurso; con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Chiapas, en la parte resolutive, que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Manuel y Cipriano Narvaez, contra los actos del Juez 2º de lo criminal de la capital del mismo Estado.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Felazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M^a Aguilar*, secretario.
—Es copia que certifico. México, Julio 5 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juez de Distrito de Veracruz, por el C. Joaquín Gerónimo Solano, contra el Juez de 1^a Instancia de Jalapa, por violación de garantías.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Joaquín Gerónimo Solano, solicita amparo y protección contra la orden de prisión que dió el C. Juez de 1^a Instancia de Jalapa, respecto de su persona, para que fuese conducido con segura custodia á la disposición del C. Juez de 1^a Instancia de Tezuitlan, Estado de Puebla, en virtud de exhorto que recibió para el efecto, sin que hubiese cometido delito alguno, asegurando que ese grave perjuicio se lo causaba el C. Jefe Político del mismo partido de Tezuitlan, de acuerdo con el de Papantla, por enemistad personal y otros motivos privados, suplicando al mismo tiempo se suspendiera el acto reclamado, con citación de los artículos respectivos de la Constitución Federal, en que estaban consignadas las garantías que en su persona se violan. Se acordó di-

cha suspensión y se pidieron los informes correspondientes, de los cuales resulta, que el C. Juez de 1^a Instancia de Jalapa procedió á la prisión del promovente por disposición del de Tezuitlan, y éste manifiesta y acredita que no existe actuación alguna en su juzgado en contra del C. Solano, por ningún delito, ni ha dirigido exhorto al de Jalapa para su aprehensión; por lo que considera de estricta justicia que con arreglo á los arts. 101 y 102 de la misma Constitución, se sirva el Juzgado amparar al quejoso, contra la orden de prisión decretada por el Juzgado de 1^a Instancia de Jalapa, de D. Joaquín G. Solano; dejando á éste su derecho á salvo para repetirlo contra quien hubiese lugar.

H. Veracruz, 14 de Enero de 1875.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Veracruz, Enero 18 de 1875.

Visto este juicio promovido por Joaquín Gerónimo Solano, en solicitud de amparo contra la providencia del Juez de 1^a Instancia de Jalapa, que lo redujo á prisión y lo consignó á la autoridad política del Cantón, para que lo remitiera á Tezuitlan á disposición del Tribunal de 1^a Instancia del mismo lugar, que lo exhortó para ese efecto en la causa que, según se asienta, se le instruye por el delito de abuso de confianza, con cuya providencia alega el quejoso, que se han violado en su persona las garantías que otorga la Constitución general de la República en sus arts. 16 y 19; los informes remitidos á este Juzgado por los citados Juez de Jalapa y Tribunal del Distrito de Tezuitlan, con lo pedido por el C. Promotor fiscal y demás piezas conducentes.

Resultando de autos, que el Juez de 1^a Instancia de Tezuitlan, ordenó la prisión de Solano y lo consignó á la autoridad política, para su remisión al Tribunal reque-